

XIII REUNION ANUAL

ASEPELT- ESPAÑA

Burgos, 17 y 18 de junio de 1999

LA SOLIDARIDAD EN LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

M^a Gabriela LAGOS RODRIGUEZ

Departamento de Economía y Empresa

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete

Universidad de Castilla- La Mancha

Resumen

La relevancia del Principio de Solidaridad en el ámbito de la financiación de las Comunidades Autónomas es incuestionable desde el punto de vista normativo. Así, desde el propio Texto Fundamental a las leyes de desarrollo del sistema de financiación, se insiste en la necesidad de que tal sistema se oriente a la corrección de los desequilibrios interterritoriales.

Nuestro interés y propósito en esta comunicación es verificar si la importancia teórica del objetivo y del instrumento principal de actuación- el Fondo de Compensación Interterritorial- se manifiesta en la realidad. Para ello, trataremos de aproximarnos al grado de solidaridad que existe en la financiación autonómica, a través de una revisión descriptiva de los mecanismos de solidaridad interregional, la exposición de los datos financieros relacionados con el FCI, la inversión regional y estatal territorializada y la consideración de ciertas magnitudes indicativas del grado de divergencia o convergencia experimentado.

LA SOLIDARIDAD EN LA FINANCIACION AUTONOMICA

I. INTRODUCCION

Nuestro propósito al abordar esta comunicación es realizar una aproximación al grado de solidaridad que existe en la financiación de las Comunidades Autónomas en España. No se trata de un análisis exhaustivo del tema, sino una revisión descriptiva de los instrumentos financieros que se destinan a la solidaridad interregional y la consideración de ciertas magnitudes indicativas de la misma.

El interés del estudio se justifica en la relevancia del principio de solidaridad dentro del ámbito considerado, como se deduce su tratamiento constitucional, no sólo en el rango de las disposiciones sino también en su extensión. Sin entrar en profundidad en los aspectos normativos, sí es importante destacar la insistencia de los preceptos constitucionales en la proyección económica de la solidaridad, tanto de forma expresa como indirecta. Asimismo, la idea predominante en esta regulación es la de referir los vínculos de solidaridad a las relaciones de las Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado. Cualquiera de los artículos referidos puede servir de muestra de estas afirmaciones, pero tiene especial relevancia el contenido del artículo 138 porque expresa la noción de solidaridad económica interterritorial que se sume en nuestro Ordenamiento¹. A tenor del literal del precepto citado, *la conducta solidaria es aquella que se dirige al establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio nacional*, o dicho de otra manera, toda actuación cuyo fin sea la atenuación y desaparición de las disparidades económicas entre las diversas partes del país.

Sin perjuicio de la importancia del artículo 2 como precepto inspirador de todo el Ordenamiento jurídico y de las referencias al equilibrio económico que encontramos en el resto de las normas, lo cierto es que el ámbito en que más se

concretan las exigencias constitucionales de solidaridad es el de la financiación de las Comunidades Autónomas. Se configura aquí como uno de los principios rectores del sistema de financiación autonómico- en cuyo análisis no vamos a entrar -, y lo que es más importante, establece un instrumento financiero con la función específica de hacer efectiva la solidaridad interterritorial, es decir, de procurar el equilibrio económico entre las nacionalidades y regiones que integran el Estado. Dicho instrumento es el Fondo de Compensación Interterritorial, cuyo destino son gastos inversión y sus destinatarios las Comunidades Autónomas.

Existe coincidencia general en señalar que no debe considerarse el FCI como el único medio para hacer real la solidaridad interterritorial. CORTECERO² distingue tres categorías que liga con los correspondientes instrumentos de financiación: suministro gratuito de bienes públicos, transferencias destinadas a financiar la formación de capital productivo y transferencias destinadas al mantenimiento de una renta monetaria suficiente. Las subvenciones específicas, se vinculan a la solidaridad interpersonal, y aunque es cierto que la referencia última es el individuo, existe una dimensión interterritorial de la solidaridad, que hemos visto reflejada en la regulación constitucional, que queda al margen de estas subvenciones y que es la que nos interesa. La consideración del suministro de bienes de públicos se liga a instrumentos financieros cuya función específica no es la de solidaridad, se dirigen a garantizar la suficiencia del sistema, sólo las Asignaciones de Nivelación actuarían de forma directa en la desaparición de las desigualdades entre Comunidades, pero no son aplicadas. De manera que, el único instrumento operativo, si consideramos de manera estricta la financiación autonómica es el FCI, que, además sí se liga de manera directa a la solidaridad. Podemos entonces afirmar que el grado de solidaridad del sistema de financiación dependerá, y mucho, de la configuración y efectividad del FCI. Por esta razón, centraremos nuestro trabajo en este instrumento.

¹ Artículo 138 CE 1978.

² CORTECERO MONTIJANO, J.A. (1991): "El principio de solidaridad en la financiación de las Comunidades Autónomas". En Presupuesto y Gasto Público. Nº5/1991. Monográfico: Financiación de las Comunidades Autónomas. I.E. F. Págs. 105 a 119.

El segundo apartado recoge la información disponible sobre el reparto y evolución del FCI y su relación con la inversión real de las comunidades autónomas. Además, se ofrecen los datos relativos a la inversión del Estado en cada Comunidad Autónoma y los niveles y evolución de creación de la Formación Bruta de Capital Fijo para cada Autonomía. Por último, hemos creído conveniente incluir ciertas magnitudes macroeconómicas indicadoras del grado de desarrollo de cada territorio. Todo ello nos permite avanzar algunas conclusiones sobre la efectividad del FCI y, en definitiva, sobre el grado de solidaridad de nuestro sistema de financiación autonómico.

El período elegido en el análisis de la evolución y reparto del FCI va de 1991 a 1998, en razón de la disponibilidad de magnitudes obtenidas del MAP³- aunque la modificación del FCI se produce en 1990 hemos preferido obviar este año para homogeneizar las series, además, su consideración no alteraría los resultados obtenidos -. Para los ejercicios 1996, 1997 y 1998, la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales no ha facilitado los datos relativos a la financiación autonómica por lo que hemos recurrido al Informe Económico-Financiero del MAP para el año 1996, a la Estadística sobre la Gestión y Ejecución del FCI para 1997, y a la información disponible en Internet del MAP para los datos del FCI de 1998. Las cifras de Formación Bruta de Capital Fijo y Valor Añadido Bruto proceden de la publicación del BBV, *La Renta Regional de España*⁴.

La sucesión en la presentación de los datos es la siguiente: comenzamos por mostrar el importe total de FCI y su distribución entre las Comunidades beneficiarias. Dado que es un instrumento destinado a inversión, analizamos después la inversión real realizada por las Autonomías, y la ponemos en relación con el FCI percibido. A continuación, nos centramos en la magnitud que muestra con mayor evidencia el progreso de la región, o dicho de otro modo, la atenuación de sus diferencias de desarrollo con el resto: la formación bruta de capital fijo. Después mostramos el volumen de inversión territorializada del Estado, agrupando el conjunto de las Comunidades que no reciben FCI y las que sí, y comparados en

³ Inversión Estatal Territorializada e Inversión Real de las CC.AA.

millones y en porcentaje la inversión real territorializada y por agentes. Y por último ofrecemos dos magnitudes, el Valor Añadido bruto y la Renta Regional, como indicadores del grado de desarrollo logrado por las Autonomías más desfavorecidas y su evolución en el periodo 1993/1995.

Finalizamos con la exposición de las conclusiones a las que nos permite llegar todo el estudio anterior.

II. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE SOLIDARIDAD EN ESPAÑA: EL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

El artículo 158.2 de la Constitución española de 1978 establece la existencia de un Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) destinado a gastos de inversión, cuya finalidad explícita es la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales y la realización efectiva del principio de solidaridad.

La primera regulación legal del FCI se produce con la aprobación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 22 de septiembre de 1980. En esta norma, en el artículo 4.2.b), se dispone que los recursos que compondrán el fondo tendrán el carácter de carga general del Estado y se distribuirán en forma de transferencia entre las distintas Comunidades Autónomas. El reparto efectivo se sometió a ciertas condiciones que determinaron la participación de cada región y provincia: el inverso de la renta real per cápita, la tasa de población emigrada en los últimos diez años, la tasa de desempleo y la superficie territorial, además de la insularidad. Estos criterios fueron variando en las distintas reformas que experimentó el FCI, pero las modificaciones han afectado más a la ponderación de los mismos que a su existencia. En 1984 aparece la primera Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, en la que de nuevo vuelve a reiterarse su vinculación con el objetivo de convergencia económica de las Comunidades Autónomas. A pesar de esta finalidad, parte de los recursos que integraban el fondo fueron dedicados a

⁴ BBV (1997): *La Renta Regional de España y su distribución provincial 1993. Avance 1994 y 1995.*

financiar la inversión nueva que requería la cesión de competencias a las Autonomías. De esta manera, el FCI no era sólo un instrumento redistributivo sino que pasó a convertirse en un elemento garante de la suficiencia financiera de las Haciendas regionales. En 1987, año de inicio del denominado Periodo Definitivo, se traspasa el 25% de los recursos del FCI a financiación incondicionada incluida en la Participación en los Ingresos del Estado de cada Comunidad Autónoma (PPI).

La situación anterior se mantuvo hasta la promulgación de una nueva Ley reguladora del FCI, la vigente, Ley 29/1990, de 26 de diciembre. La reforma se planteó con la pretensión de revisar los criterios de distribución y para evitar que se dispusiese de los fondos de solidaridad con una finalidad distinta. El primero de los objetivos propuestos se relaciona con el comportamiento adverso de la variable migratoria, cuya configuración originó una desviación de recursos del FCI hacia las Comunidades más desarrolladas, y el segundo, con la integración de las cantidades destinadas a suficiencia que se detraían del Fondo. Para solucionar los problemas anteriores, se dividió el FCI en dos subfondos complementarios: el primero se constituye por recursos exclusivamente dedicados a incentivar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y el segundo por las cantidades que las Comunidades que quedaban excluidas del primero, debían percibir para seguir haciendo frente a sus necesidades de inversión nueva ligada a la asunción de competencias. De forma paralela, el primer fondo, que podemos denominar de Solidaridad, se vincula a los Fondos procedentes de la Unión Europea cuyo objetivo también era promover la desaparición de las disparidades económicas interterritoriales. Por esta razón, sólo percibirán recursos de solidaridad las Comunidades calificadas como Objetivo N°1 para el FEDER (aquéllas con renta inferior al 75% de la media europea).

El segundo componente en que se escindió el FCI original, agrupaba los recursos destinados a financiar las inversiones asociadas a competencias transferidas. Se denominó Fondo de Compensación Transitoria y respondía a la necesidad de garantizar la suficiencia de las Haciendas autonómicas. Por esta razón, se creó con la expectativa de ser integrado en la PPI. El volumen mínimo de recursos disponibles en concepto de F.C.I. destinado a las regiones menos desarrolladas se estableció en el

30% de la inversión nueva civil del Estado. El descenso acusado de esta magnitud al inicio de la década de los 90 dio lugar al incremento del porcentaje hasta el 35% conseguido en la negociación de la financiación autonómica para el quinquenio 1992/1996, tomando como restricción inicial la cantidad dotada en 1991. La distribución del F.C.I. se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

- El 87,5% proporcionalmente a la *Población* de derecho relativa de cada Comunidad Autónoma con relación al conjunto de las Comunidades con derecho a percibir recursos del Fondo.
- El 1,6% de forma proporcional al *Saldo Migratorio*, computándose la media del saldo migratorio interno más la emigración exterior, siempre con signo negativo.
- Un 1% proporcional al *Paro*, definido como el cociente entre el número de parados y activos de cada Comunidad puesto en relación al cociente que resulte del conjunto de las Comunidades beneficiarias.
- El 3% proporcional a la *Superficie* de la Comunidad Autónoma.
- El 6,9 de resto, se distribuirá proporcionalmente a la dispersión de la población en el territorio.

El resultado será corregido por la *inversa de la renta por habitante* de cada territorio $T_i = r F n_i [1 - (R_i/r)]$, ponderado por un parámetro $(r) = 3,624$. Y se incrementará el 63,1% la cantidad que resulte a favor de Canarias en atención a su condición *insular*.

De entre las modificaciones sufridas por el Fondo en la última reforma legislativa destaca también la de permitir que se destinasen los fondos del FCI a transferencias de capital, lo que dota al instrumento de una mayor flexibilidad.

Sin adentrarnos más en las normas reguladoras de este instrumento financiero, concluimos señalando que el FCI es una transferencia condicionada del Estado a aquellas Comunidades que presentan desventajas respecto al resto en

términos de desarrollo, cuya finalidad última es hacer efectivo el principio de solidaridad.

III. LA CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA DEL FCI

La influencia que el FCI puede tener en el desarrollo de las regiones que lo perciben está en función de su cuantía y de las variables de reparto. A través de estas dos vías debe asegurarse que los fondos que se destinan a solidaridad son los suficientes, y que están bien distribuidos entre las Comunidades Autónomas en función de su grado de subdesarrollo. Es conocida por todos la escasa importancia relativa que tienen estos fondos con relación a la financiación total que el Estado destina a las Autonomías, pero lo determinante no es que sean pocos- que sería lo lógico si las disparidades interterritoriales también lo fuesen- sino que sean los necesarios.

En el Cuadro N°1 se muestra el volumen de ingresos percibidos por cada una de las Comunidades beneficiarias. Aparte de la inclusión de Cantabria en el grupo para el ejercicio 1993, destacan las participaciones de Andalucía, Galicia y las dos Castillas. Es importante apreciar la evolución diferente que experimentan en el periodo considerado (1991/1995), lo que podemos tomar como indicador del avance o retroceso del desarrollo económico de cada Comunidad. Así, por ejemplo, Andalucía muestra una mejora hasta 1994, año a partir del cual, se incrementa su dotación de FCI lo que podemos relacionar con un retroceso en su desarrollo. Por el contrario, Castilla- La Mancha muestra una tendencia a la baja para todo el periodo, con un leve repunte en los ejercicios 1997 y 1998, que puede deberse al incremento de la dotación global del fondo.

Cuadro N°1. Dotación de FCI por Comunidad Autónoma

| CC. AA. | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996⁽¹⁾ | 1997⁽²⁾ | 1998⁽³⁾ |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| AN | 51.675,8 | 51.114,3 | 50.810,0 | 49.998,3 | 50.719,8 | 51.184,9 | 53.228,6 | 55.345,9 |
| AR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AS | 1.695,6 | 2.652,7 | 3.824,1 | 4.058,6 | 4.121,7 | 4.141,1 | 4.351,7 | 4.581,9 |
| BA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CAN | 10.093,7 | 7.628,3 | 5.099,7 | 5.138,3 | 6.000,4 | 6.313,4 | 6.123,9 | 5.983,9 |

| CC. AA. | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 ⁽¹⁾ | 1997 ⁽²⁾ | 1998 ⁽³⁾ |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CANT | 0,0 | 0,0 | 1.291,0 | 1.233,0 | 1.319,4 | 1.242,1 | 1.252,5 | 1.254,8 |
| CLM | 12.327,9 | 12.325,6 | 11.121,9 | 10.904,1 | 9.273,0 | 9.037,2 | 9.688,2 | 9.969,0 |
| CL | 8.257,7 | 9.941,8 | 11.496,8 | 12.610,1 | 12.287,9 | 11.623,1 | 11.929,4 | 12.030,4 |
| CAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EX | 11.174,7 | 11.735,5 | 11.602,5 | 11.445,3 | 10.003,5 | 9.860,5 | 10.183,9 | 10.195,2 |
| GA | 21.332 | 22.130 | 23.505 | 24.073 | 23.747 | 23.670 | 24.825 | 24.540 |
| MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | 5.110 | 4.630 | 3.519 | 3.605 | 4.056 | 4.033 | 4.281 | 4.567 |
| NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | 7.178 | 6.687 | 6.575 | 5.779 | 7.316 | 7.740 | 7.920 | 7.767 |
| TOTAL | 128.845 | 128.845 | 128.845 | 128.845 | 128.845 | 128.845 | 133.245 | 136.245 |

Elaboración propia.

(1) Informe Económico- financiero de las AA. TT. 1996.

(2) Estadística sobre la Gestión y ejecución del FCI. Marzo de 1998.

(3) Internet. MAP.

En los Gráficos 1, 2, y 3 se puede ver la evolución experimentada por tres de las variables sobre las que se calcula el importe de los fondos procedentes del F.C.I. Hemos tomado la magnitud *Población* porque de ella depende el máximo porcentaje de reparto, mientras que el *Saldo Migratorio* y el *Paro* nos sirven como indicadores de la evolución económica regional.

Gráfico N°2. Ponderación del Saldo Migratorio
Gráfico N°1. Ponderación de la variable
Población

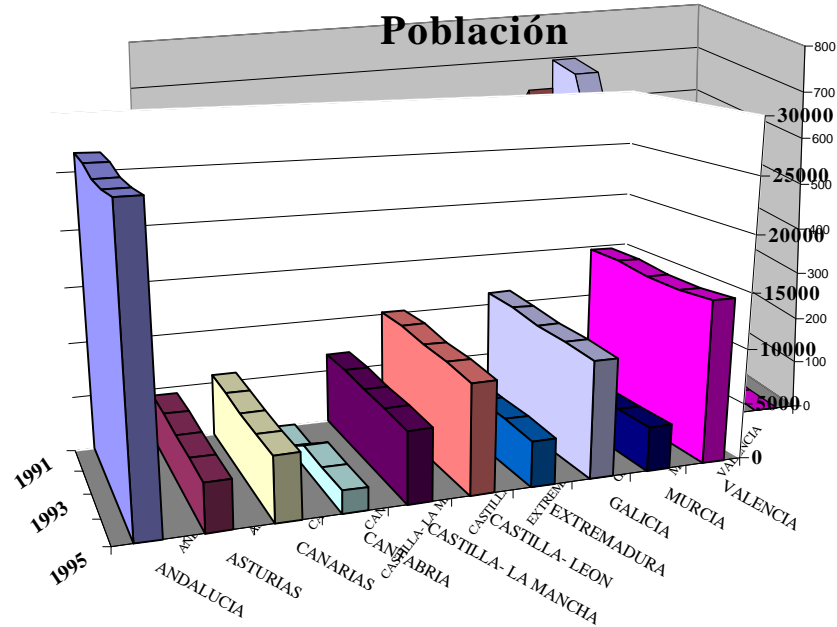
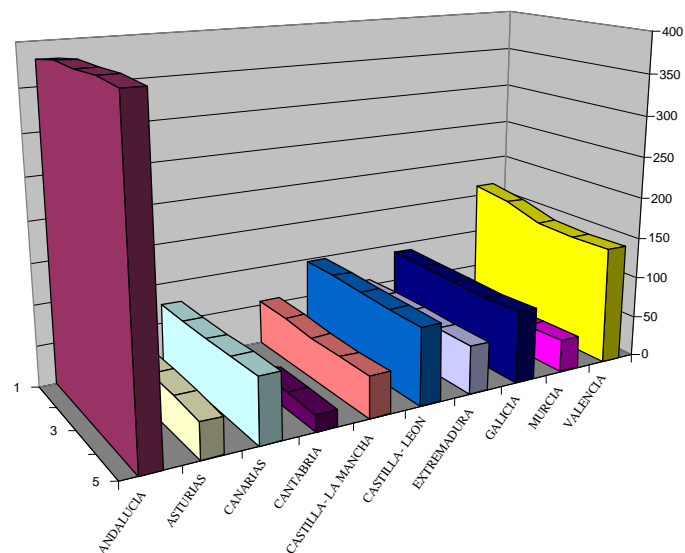


Gráfico N°3. Ponderación de la Variable Paro

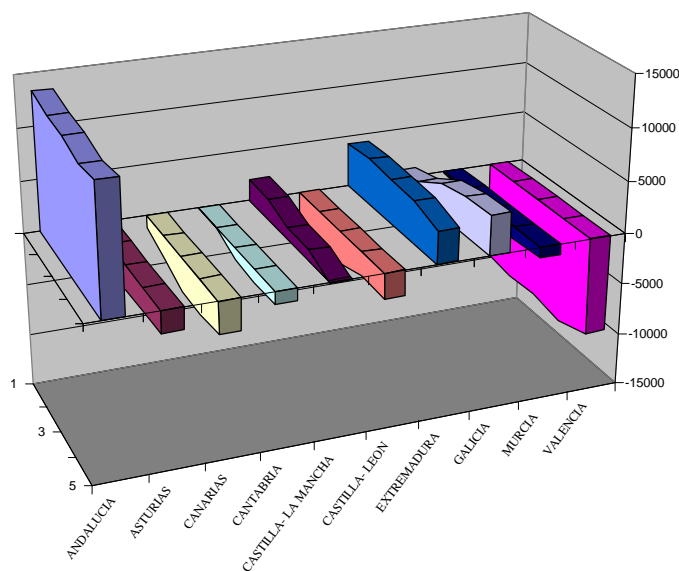


Destaca el peso relativo de la población para Andalucía, Valencia, Galicia y Castilla- León. El saldo migratorio, que muestra la pérdida o ganancia de población por traslados, indica que Galicia, Andalucía y Castilla- La Mancha mejoran su

situación, es decir, atraen población de otros territorios, mientras que Castilla- León y Extremadura la pierden. En términos de paro sólo Valencia experimenta un descenso significativo, siendo la línea general la del mantenimiento de la tasa de desempleo.

En el Gráfico 4 hemos representado las diferencias económicas que existen entre las Comunidades Autónomas beneficiarias del F.C.I. tomando como referencia el criterio corrector de la inversa de la renta por habitante. Destacan en los extremos, Andalucía y Valencia, y no deja de ser significativo que sólo tres de las nueve Autonomías obtienen un valor positivo para esta magnitud en 1995, con el paso de Castilla- La Mancha a valor negativo, lo que supone que descende su participación en renta por esta variable, y el consiguiente aumento de la magnitud en proporción al resto de Autonomías.

Gráfico N°4. Inversa de la renta per cápita



Como el destino de estos fondos es la inversión real nueva, lo que hacemos a continuación es ofrecer los datos de este tipo de operación por Comunidad Autónoma. A tenor de la información que se ofrece en el Cuadro N°2, se observa que Andalucía, Extremadura y Murcia siguen una tendencia descendente en su inversión

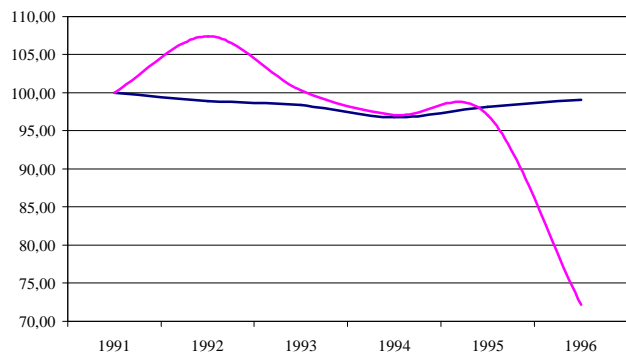
real. El fuerte incremento de Cantabria para el ejercicio 1993 es coherente con el hecho de que fuese este el primer año en que recibe el FCI. En cuanto al resto, la estabilidad es la regla, con ligeros incrementos, más importante en el caso de Valencia, y con un descenso en el ejercicio 1996 para Galicia que rompe la tendencia al alza de los años anteriores.

Cuadro Nº2. INVERSIONES REALES DE LAS CC.AA. (Millones de ptas.)

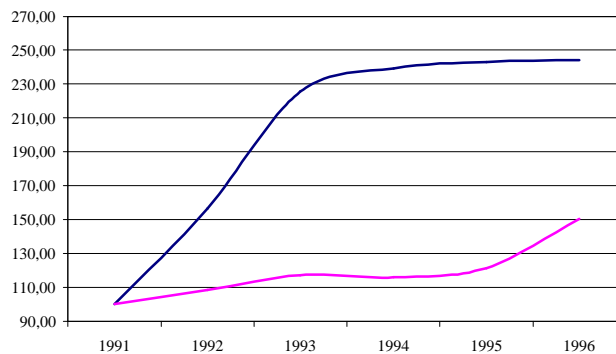
| CC.AA. | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AN | 227.118,90 | 243.864,45 | 227.708,39 | 220.412,40 | 220.412,40 | 163.855,95 |
| AR | 28.599,21 | 31.258,18 | 19.793,30 | 27.183,98 | 7.862,05 | 15.386,47 |
| AS | 29.286,72 | 31.738,34 | 34.325,31 | 33.920,53 | 35.566,86 | 44.050,25 |
| BA | 11.821,87 | 18.611,01 | 17.292,86 | 15.229,00 | 16.028,26 | 16.607,45 |
| CAN | 49.705,56 | 54.298,31 | 43.146,83 | 50.243,78 | 55.279,83 | 60.178,59 |
| CANT | 9.841,85 | 9.048,72 | 8.619,56 | 15.596,59 | 7.536,96 | 19.737,92 |
| CLM | 43.047,15 | 45.733,16 | 51.936,76 | 52.656,72 | 52.817,60 | 53.908,70 |
| CL | 61.487,94 | 67.940,36 | 69.014,97 | 66.934,48 | 67.540,52 | 71.960,56 |
| CAT | 108.582,84 | 140.536,53 | 133.101,69 | 129.745,12 | 140.854,37 | 113.340,69 |
| EX | 53.582,62 | 55.511,07 | 56.268,27 | 49.484,33 | 50.961,95 | 45.374,33 |
| GA | 83.726,13 | 102.400,60 | 108.479,69 | 103.710,80 | 105.254,30 | 84.639,07 |
| MA | 47.196,88 | 48.382,42 | 52.641,23 | 52.629,79 | 57.277,30 | 55.373,80 |
| MU | 20.191,06 | 21.208,02 | 21.843,63 | 16.465,82 | 17.872,66 | 18.134,04 |
| NA | 37.272,96 | 40.452,09 | 36.195,45 | 31.902,49 | 31.742,21 | 29.132,01 |
| PV | 50.920,34 | 60.011,50 | 66.588,06 | 61.616,91 | 57.793,16 | 49.977,65 |
| RI | 8.757,47 | 5.999,51 | 5.178,76 | 4.640,41 | 5.766,42 | 5.919,48 |
| VA | 80.098,10 | 91.628,88 | 98.221,01 | 102.378,63 | 115.346,31 | 111.056,96 |
| TOTAL | 862.382,03 | 970.994,76 | 946.956,00 | 927.732,74 | 924.800,43 | 841.657,48 |

Los Gráficos 5 a 14, nos sirven para poner en relación las dotaciones de FCI y la inversión real de cada Comunidad. Hemos "indiciado" los valores respecto al año 1991 y de esta manera podemos comparar las evoluciones de las dos magnitudes.

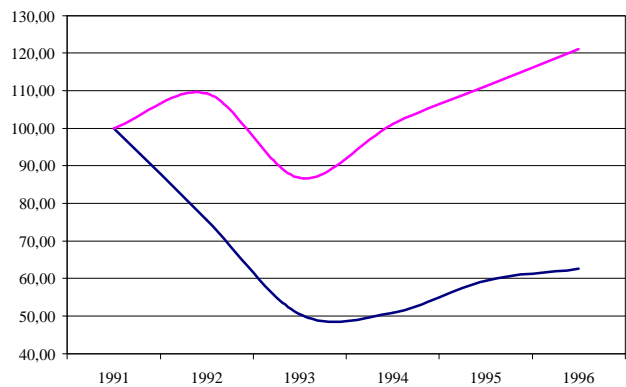
ANDALUCIA



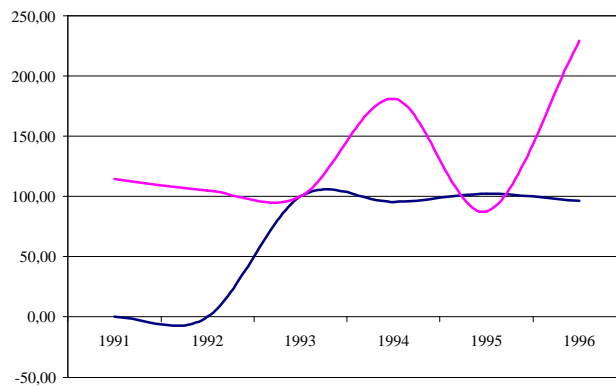
ASTURIAS



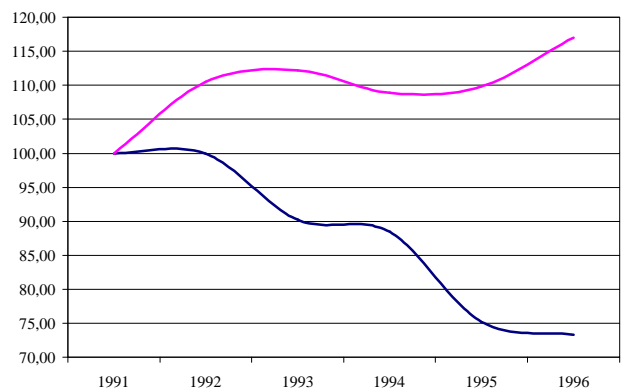
CANARIAS



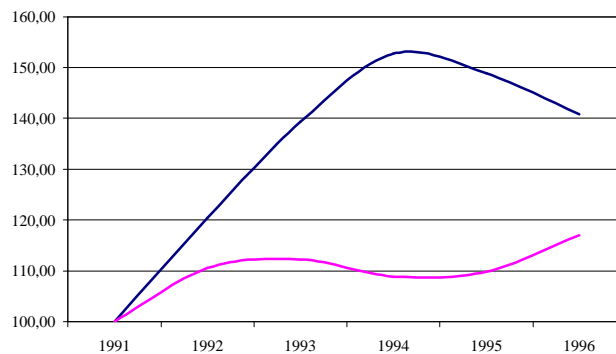
CANTABRIA

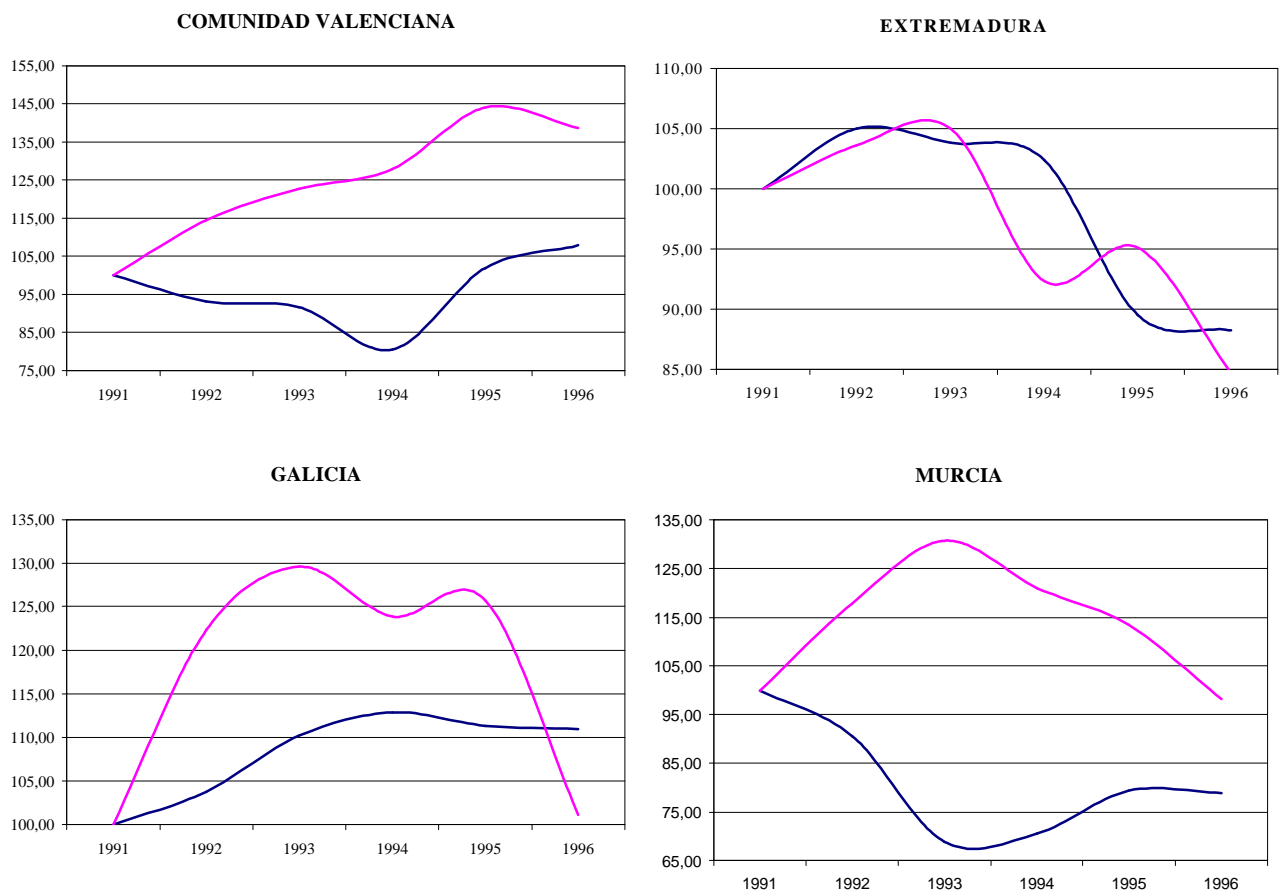


CASTILLA- LA MANCHA



CASTILLA Y LEON

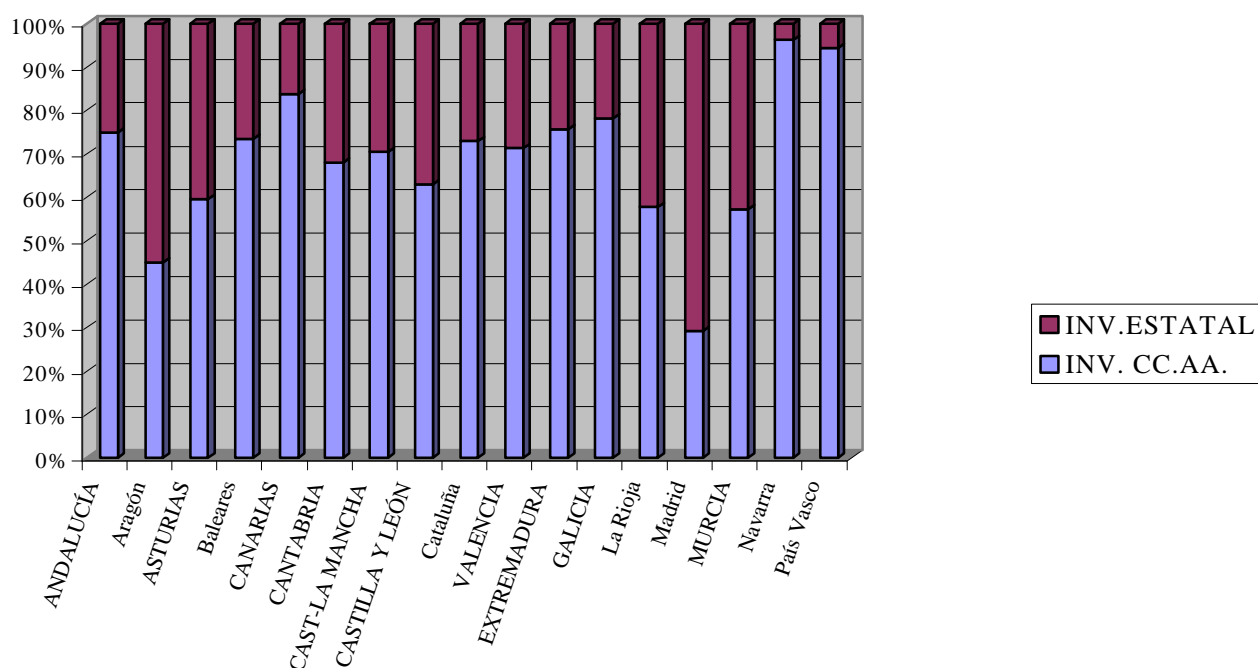




Canarias, Valencia y Extremadura son las Comunidades que más sintonía muestran entre FCI e inversión- las dos primeras al alza y la última en su descenso -. También hay una evolución similar en Asturias, pero en este caso, la inversión aumenta más que el FCI, y en Galicia pero al contrario. Castilla- León, Cantabria y Castilla- La Mancha realizan un volumen de inversión real creciente a pesar del descenso de la financiación por FCI- muy acusado en esta última Comunidad -. Andalucía y Murcia son las únicas en las que aumenta el FCI y desciende la inversión real.

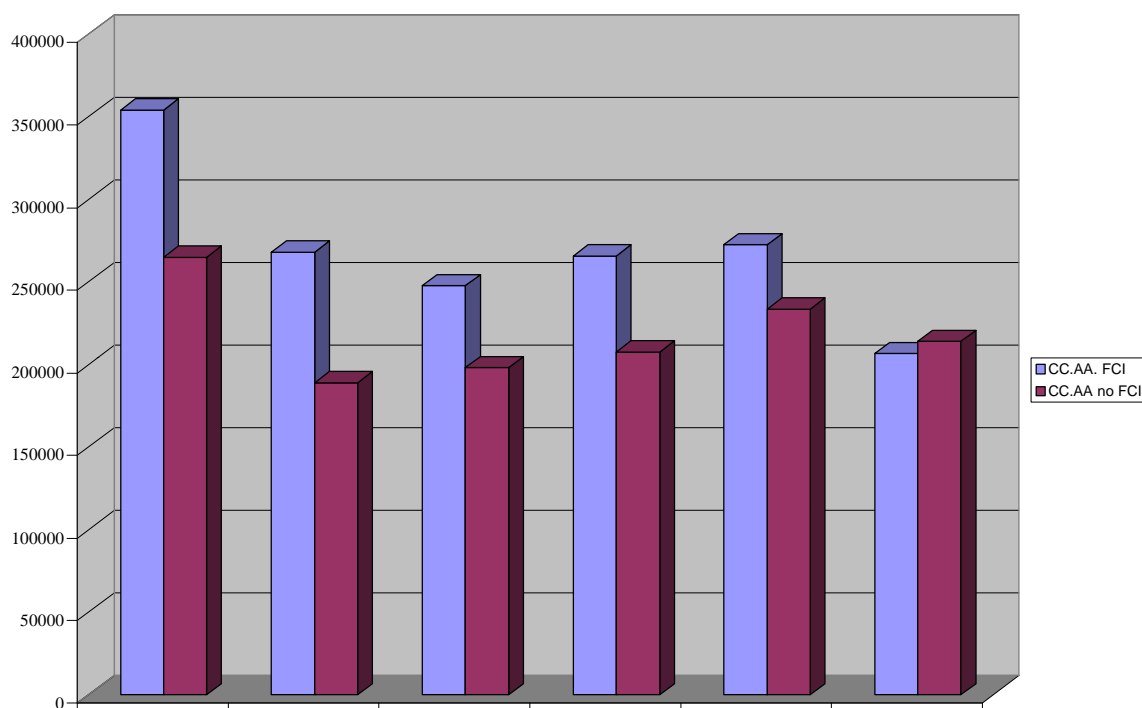
La propia Ley del FCI dispone que la inversión estatal también debe atender al criterio de solidaridad, es decir, a la reducción de desigualdades económicas entre territorios. Esta premisa, induce a pensar que el Estado deberá realizar un mayor esfuerzo inversor en las Comunidades desfavorecidas. Los Gráficos siguientes muestran la proporción en la inversión real de cada Comunidad por agentes, en millones y en términos relativos. Madrid y Aragón, que nos son de las regiones menos desarrolladas, destacan como las Autonomías donde más invierte el Estado. El Gráfico 16 contiene la representación el volumen de inversión estatal territorializada,

INVERSION REAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS Y AGENTES



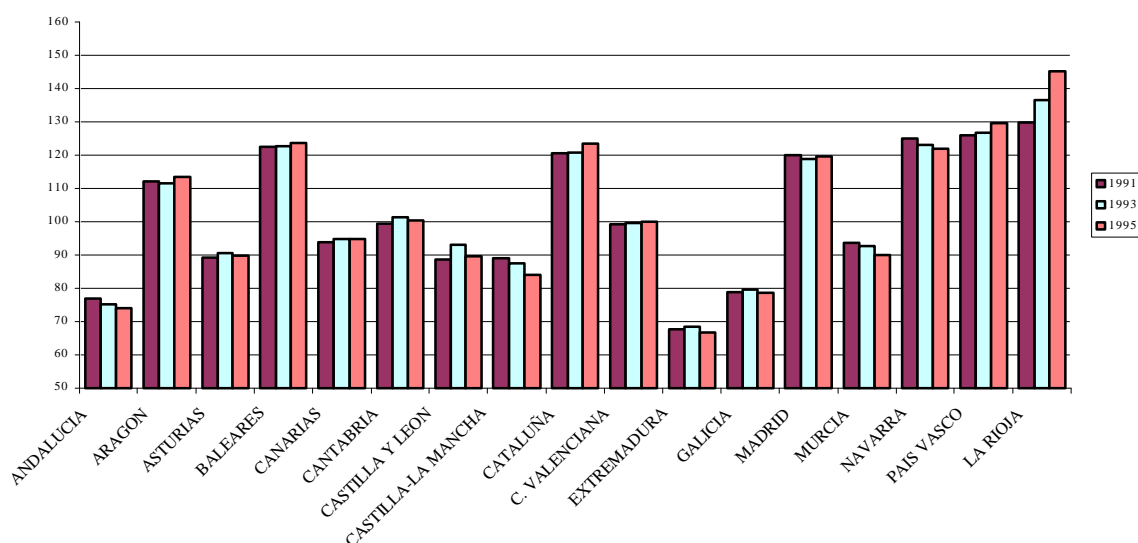
agrupando las Comunidades en función de, si son beneficiarias del fondo o no. Lo más significativo es el progresivo incremento de la inversión en las Comunidades más desarrolladas, que llegan a superar a las otras para 1996.

Gráfico N°16. INVERSION PUBLICA ESTATAL TERRITORIALIAZA



La situación anterior sería coherente si se constataste, en el periodo considerado, la reducción de las disparidades interterritoriales. La mayor parte de los estudios de convergencia entre regiones muestran la evolución contraria a la

GRAFICO N°17
VAB/Hab Indice ESP=100



sugerida, es decir, las diferencias entre Comunidades ricas y pobres se acrecientan. Nosotros, para este trabajo, hemos elegido como magnitud representativa del grado de desarrollo regional el Valor Añadido, que es la más utilizada en los estudios de crecimiento. Nosotros la presentamos en valor por habitante e "indiciada" respecto al valor de España⁵, de esta manera podemos observar la situación relativa de cada una respecto al total. A tenor de los datos obtenidos, las diferencias no se atenúan, y, además, evolucionan mejor las más desarrolladas.

⁵ La fuente de los datos con que elaboramos el Gráfico es un informe de la Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria, de noviembre de 1997, sobre la *Evolución de las Economías Regionales en los primeros 90*.

IV. CONCLUSIONES

1. Desde el punto de vista normativo destaca la restricción de los fondos de solidaridad en función de una magnitud- la inversión pública- que queda a la decisión del Gobierno nacional. De manera, que en última instancia dependen de una decisión de naturaleza política.
2. Los datos muestran la escasa importancia cuantitativa de los recursos destinados a solidaridad y la gran dispersión del reparto. Incluso, existe un cierto efecto perverso en la redistribución al tomar como elemento comparativo el VAB/habitante. Por ejemplo, Valencia alcanza valores próximos a la media nacional a diferencia de Asturias, que, sin embargo, percibe menos fondos por F.C.I. que la primera.
3. La evolución económica de las regiones más desfavorecidas en el periodo 1991/1995 pone de manifiesto la persistencia de las disparidades iniciales, agravadas los casos de Andalucía, Castilla- La Mancha y Murcia que han visto descender su VAB. Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla- León y Galicia muestran la misma tendencia a la baja, pero con un leve repunte en 1993. De forma que, sólo la Comunidad Valenciana ha conseguido aumentar su VAB, es decir, aproximarse a la media nacional.
4. La inversión territorializada del Estado no responde a los presupuestos normativos vigentes.
5. Las consideraciones anteriores permiten afirmar la escasa importancia que el sistema de financiación concede al principio de solidaridad, la poca efectividad de los recursos que se destinan al desarrollo de las regiones más desfavorecidas y el incremento de las diferencias relativas entre ellas.